



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE: 2276/2021

Sexta Sala Unitaria

SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA.

GUADALAJARA, JALISCO, A 25 VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

VISTOS los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa radicado con el número de expediente **2276/2021**, promovido por [REDACTED] por su propio derecho en contra de la autoridad demandada **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO**; y,

RESULTANDO:

1.- Por auto de fecha **16 DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTUNO**, se recibió el escrito signado por la parte actora [REDACTED], mediante el cual interpuso demanda de nulidad, misma que se admitió, teniendo como autoridades demandadas **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO**, y señalando como resoluciones impugnadas 1.- La Cédula de Notificación de Infracción con número de folio [REDACTED] emitidas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. 2.- La cédula de notificación de infracción con número de folio [REDACTED], emitida por la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. 3.- El cobro por el refrendo anual por el ejercicio fiscal de **2020** dos mil veinte, el folio [REDACTED] a cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

Asimismo, por estar ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres, se admitieron la totalidad de las pruebas ofrecidas por la parte actora, mismas que se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza. Con las copias simples del escrito de cuenta, así como de los documentos adjuntos se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que en el término de **10 DIEZ** días produjeran contestación a la demanda entablada en su contra, apercibiéndoseles que, en caso de no hacerlo así, se les tendrían por ciertos los hechos que la actora les imputó de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resultaran desvirtuados. Por otro lado, se requirió a las demandadas para que dentro del término de **5 CINCO** días exhibieran los folios solicitados, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se haría acreedora a una multa.

2.- Mediante acuerdo de fecha **03 TRES DE FEBRERO EL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS**, se tiene la **C. CELIA BERTHA ALVAREZ NUÑEZ**, en su carácter de **DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARIA LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**, compareciendo en **REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DE LA ANTES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**, mismo que se le reconoce de conformidad con lo establecido por el artículo **44** fracción **II**, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se le tiene dando **contestación a la demanda** interpuesta en su contra, **se admiten** las pruebas por estar ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral o a las buenas costumbres, teniéndose por desahogadas las mismas por su propia naturaleza. **Córrase traslado a la parte actora**, para que dentro del término de **5 CINCO DÍAS** manifieste lo que a su derecho convenga; en tanto que las autoridades demandadas adscritas a la **SECRETARIA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO y SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO no dieron contestación a la demanda** entablada en su contra, se les tiene por no contestada la demanda interpuesta en su contra, en consecuencia por ciertos los hechos. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo que establece el numeral **279** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco aplicado supletoriamente a nuestra materia, se declara la **rebeldía** a la enjuiciada.

El que suscribe, [REDACTED], presenta **PRUEBA SUPERVENIENTE** de su parte consistentes en la copia certificada del recibo oficial [REDACTED], expedido por la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco así como copia de la denuncia por robo del vehículo sobre el cual recaen los actos impugnados, razón por la cual, con fundamento en el artículo y Ley antes mencionado, **se da vista a las autoridades demandadas**, para que en el término de 5 cinco días manifiesten lo que a su derecho convenga; Se da cuenta que, las autoridades demandadas fueron omisas en dar cumplimiento al requerimiento contenido en el auto admisorio respecto de los documentos solicitados, por lo que se le tienen por ciertos los hechos que el actor le impute de manera precisa dentro del escrito inicial de demanda. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio se advierte que no existen pruebas pendientes por desahogar, por lo que se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de **3 TRES** días formularan sus alegatos, y una vez



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

realizado lo anterior o transcurrido el término señalado se ordenaría turnar los autos al Magistrado Presidente de esta Sala para dictar la sentencia definitiva correspondiente; y:

CONSIDERANDO:

I.- COMPETENCIA.- Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver de la presente controversia, de conformidad a lo establecido por los artículos **65 y 67** de la Constitución Política del Estado de Jalisco; **4 y 10** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; **1, 2, 3, 4, 6, 9, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 73 y 74** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II.- PERSONALIDAD. – La personalidad de la parte actora [REDACTED] quedó debidamente acreditada en virtud de que compareció por su propio derecho, de conformidad con el artículo **36 fracción II** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En cuanto a la autoridad demandada, compareció a juicio las autoridades demandadas **SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO**, mismas que acreditaron su personalidad a través de los documentos idóneos, de conformidad con el arábigo **44, fracción II** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

III.- VÍA.- La Vía Administrativa elegida por el actor es la indicada, toda vez que se trata de combatir un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo previsto por los artículos **1º, 2º, 9º** y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

IV.- ACCIÓN.- La acción puesta en ejercicio por la parte actora se encuentra debidamente prevista en el artículo **1º** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

V.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA.- Tanto los conceptos de impugnación, como los medios de defensa que se hicieron valer, no se transcriben por economía procesal, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen en la presente resolución. A lo anterior sirve de apoyo en lo conducente, por las razones que sustenta, la Jurisprudencia visible en la página 599, del Tomo VII, abril de 1998, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.

VI.- MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES. - Enumeración y valoración de las pruebas ofertadas por cada una de las partes, mismas que han sido admitidas por esta Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos correspondientes.

a) Pruebas ofertadas por la parte actora:

1.- Documental Pública: Consistente en la tarjeta de circulación en original del vehículo infraccionado. Medio de convicción al que se le concede valor probatorio pleno y que resultan idóneos para lo pretendido de conformidad con lo dispuesto por el artículo **399 y 400** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

2.- Elemento Técnico: Consistente en la copia de la impresión del adeudo vehicular del vehículo infraccionado con número de placas [REDACTED]. Medio de prueba al que se le otorga valor probatorio de conformidad a lo establecido por el artículo **298 fracción VII, 406 bis y 418** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

4.- Documental Privada: Consistente en las solicitudes elevadas a las autoridades demandadas en las cuales solicitan se otorguen las certificaciones de todas las infracciones impuestas a los vehículos infraccionados antes referidos, a la que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con el artículo **403** del Código de



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

5.- Documental Pública: Consiste en la copia certificada del recibo oficial de pago con número de folio [REDACTED], emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con fecha del 23 veintitrés de Junio del año 2021 dos mil veintiuno; y la copia simple de la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, con el número de Carpeta de Investigación [REDACTED], mismas que **SE ADMITEN** como **PRUEBA SUPERVENIENTE**, de conformidad con lo que establece el artículo 48, último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, en virtud de haber sido presentadas con fecha posterior al escrito inicial de demanda, otorgándoles dicho valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo **399 y 400** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

6.- Instrumental de Actuaciones: Probanza a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con lo previsto por el arábigo **402** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

7.- Presunción Legal y Humana: Medios de convicción a los que se les otorga valor probatorio, de conformidad con lo previsto por los artículos **415 y 417** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

VII.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.- Al no advertirse por este Juzgador la actualización de alguna otra causal de improcedencia, se avoca al estudio de la litis planteada de conformidad con el artículo **73** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en primer término, con fundamento en la **fracción I** del artículo citado, resulta conveniente señalar que los actos controvertidos mediante el presente juicio se hacen consistir **1.-** La Cédula de Notificación de Infracción con número de folio [REDACTED] emitidas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. **2.-** La cédula de notificación de infracción con número de folio [REDACTED], emitida por la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. **3.-** El cobro por el refrendo anual por el ejercicio fiscal de **2020** dos mil veinte, el folio [REDACTED] a cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

En ese orden de ideas, mediante auto admisorio, esta Sexta Sala Unitaria requirió a las autoridades demandadas, para efecto de que remitiera al presente juicio constancias de los actos impugnados que el actor manifestó desconocer, sin que las autoridades demandadas hubiesen dado cumplimiento al respecto, toda vez que no exhibieron las documentales solicitadas, lo anterior, de conformidad con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de contestar la demanda se encontraban obligadas a exhibir las constancias que acreditaran la existencia de las resoluciones impugnadas, en consecuencia, dicha omisión conlleva la declaración de su nulidad lisa y llana, en razón, insístase, por no ofrecer los medios necesarios para acreditar la existencia de las cédulas de notificación de infracción atribuida al vehículo perteneciente a la parte actora. Robustecen el criterio adoptado por esta Sala, aplicadas por analogía y en lo conducente, las siguientes Jurisprudencias:

"Época: Novena Época
Registro: 163102
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, enero de 2011
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 196/2010
Página: 878

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 209/2007, de rubro: "JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.", sostuvo que del artículo 209 bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), se advierte que la autoridad al contestar la demanda, en caso de que el actor manifieste desconocer la resolución que determina un crédito

**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

fiscal, ya sea porque aduzca que le fue notificado incorrectamente o simplemente que no se le dio a conocer, la autoridad debe exhibir constancia del acto y su notificación. De lo que se sigue que el término "constancia" a que se refiere dicho precepto debe entenderse como el documento original o en copia certificada, que reúna los elementos necesarios para que el actor lo conozca cómo fue emitido, con el fin de que pueda impugnarlo, resultando insuficiente que la autoridad exhiba la reimpresión o copia simple del acto impugnado, dado que estos documentos no cumplen con todos los requisitos de un acto administrativo. Cabe destacar que el cumplimiento del requisito indicado es independiente a los conceptos de invalidez que el particular haga valer, pues lo que se pretende es conocer el contenido del acto en los términos de su emisión, para que el actor pueda entablar su defensa.

Época: Novena Época. Registro: 170712

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, diciembre de 2007

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 209/2007, Página: 203

JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.

Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación.

Época: Décima Época. Registro: 160591

Instancia: SEGUNDA SALA

Tipo Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4. Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 173/2011 (9a.) Pág. 2645

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad

**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Por otra parte, se tiene a la parte actora manifestando que el cobro del crédito fiscal por concepto de Refrendo Anual de placas vehiculares relativo al ejercicio fiscal **2020** deviene de inconstitucional, inequitativo y desproporcional. Con la finalidad de no incurrir en ninguna violación, debe decirse que, a consideración de este Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, en el caso propuesto no existe violación a derechos humanos. Ciertamente, a juicio de esta Sala no se aprecia violación alguna a los derechos del reclamante, consideración que es suficiente para dar por cumplida con las formalidades que exige el artículo 73, del de la Ley Adjética de la Materia.

Esto es así, pues si bien este Magistrado Instructor no desconoce que con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de junio de 2011 dos mil once, y con la entrada de la Décima Época, el orden jurídico nacional evolucionó de tal manera que, contrario a lo sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la novena época, en nuevas reflexiones y acorde a los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que los Órganos Jurisdiccionales ordinarios para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, mediante el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, previo a ciertos pasos pueden inaplicar leyes secundarias.

No menos cierto, es mencionar que en relación a dicha figura, la propia Corte ha determinado mediante tesis jurisprudenciales que, no obstante lo anterior, subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde de manera exclusiva al Poder Judicial de la Federación, ello a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, medios de control constitucional que se encuentran previstos por los artículos 103, 105 y 107 de nuestra Carta Fundamental; teniendo especial relevancia dichas cuestiones, en virtud de que dentro del presente medio de control, el tema de inconstitucionalidad o inconventionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad.

De modo que, aun cuando el artículo 1° Constitucional, dispone que es obligación de este Tribunal especializado en materia administrativa ejercer el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, de las disposiciones jurídicas que se apliquen en los actos impugnados; basta con que este Órgano Jurisdiccional considere que no se advierte violación alguna de derechos humanos en el presente asunto que ameriten la inaplicación de una norma, para que tal resolución se estime suficiente para estimar que se realizó el control difuso correspondiente, y que se respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, pues la norma no generó en quien resuelve convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas de nuestro sistema, lo anterior en virtud de que de un simple análisis de las disposiciones normativas se desprende el hecho que no es el mismo servicio que se presta a un vehículo automotor que a una motocicleta, como lo pretende evidenciar la parte actora, de ahí que como se dijo este Juzgador no advierte violación de derechos humanos alguna.

Esto último se sustenta en el siguiente criterio jurisprudencial aprobado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se identifica con la clave número 2a./J. 16/2014 (10a.), visible en la página 984, del Libro 5, del Mes de Abril, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y que señala lo siguiente:

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de

**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

inconstitucionalidad o inconventionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconventionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

En virtud de lo anterior, habiéndose declarado la nulidad lisa y llana de la cédula de notificación de infracción impugnada con número de folio de [REDACTED] emitidas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. **2.-** La cédula de notificación de infracción con número de folio [REDACTED], emitida por la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. **3.-** el folio [REDACTED], a cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, resulta procedente decretar nulos sus respectivos recargos, multas, requerimiento de pago y gastos de ejecución, lo anterior al constituir frutos de actos viciados de origen. Sirve de apoyo al criterio sustentado por esta Sala, la tesis de Jurisprudencia que a continuación se invoca:

***ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.** Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.*

En lo que respecta a la devolución solicitada por el actor como pago de lo indebido, **NO HA LUGAR**, toda vez que del recibo oficial de pago con número de folio [REDACTED] que exhibe como prueba superveniente y contenido en la foja 30, no se advierte cobro alguno en relación a los actos administrativos que impugnó. No es óbice a lo anterior que haya efectuado el pago por concepto de refrendo anual del año 2020, sin embargo, como se determinó en párrafos previos se reconoció la validez de éste y por ende su devolución es improcedente.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos **4 y 10** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, **73, 74 fracción II, 75 fracciones II, III y IV y 76** de la Ley de Justicia Administrativa, ambas legislaciones del Estado de Jalisco, es de resolverse la presente litis a través de las siguientes:

PROPOSICIONES:

Página 6 de 7



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE: 2276/2021

Sexta Sala Unitaria

PRIMERA.- La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y capacidad de las partes; la procedencia de la vía Administrativa elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han quedado debidamente acreditadas en autos.

SEGUNDA.- La parte actora [REDACTED] acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO**, no justificaron sus excepciones y defensas; en consecuencia:

TERCERA.- Se reconoce la validez del cobro del derecho de refrendo anual de placas vehiculares relativo al ejercicio fiscal **2020 así como sus accesorios**; por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidas en el considerando VII, de la presente resolución.

CUARTA. Se declara la nulidad de **1.-** La Cédula de Notificación de Infracción con número de folio **280502839**, emitida por la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco. **2.-** Las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio [REDACTED] emitidas por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. **2.-** La cédula de notificación de infracción con número de folio [REDACTED], emitida por la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. **3.-** el folio [REDACTED], a cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco; todo ello por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidas en el considerando VII, de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió la **SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**, por conducto del ciudadano **MAGISTRADO PRESIDENTE MAESTRO ALBERTO BARBA GÓMEZ**, ante la **SECRETARIO PROYECTISTA LICENCIADA ANA LOURDES LÓPEZ ORDÓÑEZ**, que autoriza y da fe.

ABG/ALLO/euhr

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.